

CONSEJERÍA DE FAMILIA,  
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

**ORDEN****NÚMERO 1246/2024**

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

**Expte.: 021/2025**

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes:

En virtud de lo que establece el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP)

**DISPONGO**

Acordar el inicio y tramitación del expediente correspondiente al contrato de Servicios denominado "GESTIÓN DE PISO ESPECIALIZADO EN MENORES EXTRANJERAS NO ACOMPAÑADAS SUSCEPTIBLES DE SER VÍCTIMAS DE TRATA Y/O EXPLOTACIÓN SEXUAL, POSIBLES TESTIGOS PROTEGIDOS, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD (5 PLAZAS)" a propuesta de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, cuya adjudicación se efectuará por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, al amparo de lo previsto en los artículos 131 y 146.2 de la LCSP, justificando su necesidad en los siguientes motivos:

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, se relaciona con los compromisos y metas del Pacto de Estado contra la violencia de género, así como de la Agenda 2030 en varios ámbitos, y de forma muy específica con la meta 16.2: «Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.» dentro del Objetivo 16 de promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. Esta ley tiene en cuenta las formas de violencia que las niñas sufren específicamente por el hecho de ser niñas y se aborda y previene, a la vez que se incide en que solo una sociedad que educa en respeto e igualdad será capaz de erradicar la violencia hacia las niñas.

Por su parte, la Comunidad de Madrid es también la Entidad Pública responsable de las competencias en materia de menores, dentro de su ámbito territorial, conforme al artículo 148.1 de la Constitución Española que atribuye a las CCAA la facultad de asumir competencias en materia de asistencia social, junto con lo dispuesto en el artículo 10.3 de Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, en su redacción dada por el artículo primero, apartado cinco de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y la Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid

La Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad asume las competencias, en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, en materia de protección de los menores en situación de desamparo y con ello a través de la Comisión de Protección a la Infancia y Adolescencia, se adoptan las medidas de protección necesarias para su guarda.

La Comunidad de Madrid ha sido pionera en la lucha contra la violencia de género, implantando servicios de atención para víctimas de trata ya desde el año 2007, a raíz de la aprobación de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, que, además de la violencia de pareja o ex pareja, que recoge como supuestos intolerables que también dan forma a la violencia de género: la mutilación genital femenina, el acoso sexual, las agresiones y abusos sexuales contra las mujeres, la trata de mujeres con fines de explotación sexual o la inducción a una mujer a ejercer la prostitución.

La red de centros de protección de menores de la Comunidad de Madrid está compuesta por centros de

carácter abierto, sin medidas extraordinarias de seguridad, por lo que, en ocasiones de grave riesgo para la menor (que pudiera estar amenazada o en peligro por estar inmersa en alguna de las redes de explotación o trata que se detecten), la Red de Centros de Protección no está preparada para atender esa necesidad, que además puede suponer un riesgo añadido para el resto de menores. Por ello, resulta de especial importancia poder contar con la posibilidad de derivar el cuidado y atención de la menor en un primer momento y en tanto se valora la posibilidad de integración en condiciones de seguridad en un centro con otros chicos y chicas de su edad.

Además, respecto a menores, el *Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados* aprobado mediante Resolución de 13 de octubre de 2014, y publicado en el BOE de 16 de octubre de 2014 y en el que tuvo una participación activa en su elaboración la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad recoge recomendaciones y actuaciones concretas en los casos de posible víctima de trata y/o explotación sexual, entre ellas, la opción de recursos especializados.

La Comunidad publicó la Estrategia Madrileña contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual 2016-2021 y cuyo OBJETIVO 3 recoge las medidas dirigidas a la atención de las situaciones de mayor vulnerabilidad: víctimas de trata con fines de explotación menores de edad, mujeres con discapacidad física y/o psíquica, problemas de salud mental, drogodependencia, mujeres con menores a cargo y siendo la medida 3.1 la creación de un centro de acogida para la atención a menores víctimas de trata.

El recurso cuya gestión se licita es el que da cumplimiento al mandato de esta Estrategia y teniendo en cuenta estas competencias y careciendo de medios propios suficientes y adecuados, en virtud del art.131 de la LCSP, se debe acudir a la licitación de un contrato de servicios, cuyo objeto consiste en el acogimiento temporal de menores que pudieran estar inmersas en una red de trata con fines de explotación sexual y, una vez tuteladas, requieran ser atendidas por un servicio especializado y con determinadas medidas de reserva y seguridad en atención a su posible situación de testigo protegido, con cargo a la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad.

Madrid, a fecha de firma.	<p>LA CONSEJERA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES (P.D. Orden 3147/2023, de 5 de diciembre, BOCM nº 304, de 22/12/2023) LA DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD.</p> <p>Firmado digitalmente por: SILVIA VALMAÑA OCHAITA - ***6248** Fecha: 2024.04.12 14:19</p> <p>Fdo: Silvia Valmaña Ochaíta.</p>
---------------------------	--